

Sr. NESTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA
Fiscal General de la Nación

Barcelona, 27 de abril de 2018

Señor Fiscal General Néstor Humberto Martínez Neira,

Desde la Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, plataforma formada una veintena de entidades, le escribimos para expresar nuestra preocupación por lo que parecen ser acusaciones injustas contra la Sra. Sara Liliana Quiñonez y la Sra. Tulia Maris Valencia, lideresas del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera y destacadas defensoras de derechos humanos.

Conocimos a la Sra. Quiñonez personalmente en 2016 en Barcelona, Estado español, en el marco de una gira europea. En su visita se reunió con diputados de diferentes partidos políticos en el Parlament de Catalunya. La Sra. Quiñonez expuso las amenazas que pesaban sobre ella y sobre el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera y pidió apoyo a las sociedad e instituciones catalanas para que las preocupaciones de las comunidades afrocolombianas fueran escuchadas en la mesa de La Habana y en el proceso de negociación con el ELN.

La Sra. Quiñonez y la Sra. Valencia hacen parte del Proceso de Comunidades Negras (PCN) y han arriesgado sus vidas para defender legítimamente los derechos individuales y colectivos de la comunidad afrocolombiana. Durante décadas, el Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera ha sido sometido a violencia y despojo por parte de grupos paramilitares, grupos guerrilleros, narcotraficantes, soldados y corporaciones multinacionales.

En 2012, otro activista del PCN, Félix Banguero, fue arrestado junto con otras 27 personas en circunstancias similares por presuntamente pertenecer a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Después de pasar más de dos años en una prisión con alto hacinamiento, Banguero fue liberado por falta de pruebas. Él continúa manteniendo su inocencia y sigue comprometido con la lucha por los derechos afrocolombianos. Nos preocupa mucho que la Sra. Quiñonez y la Sra. Valencia estén enfrentando una situación similar que viola sus derechos humanos.

La Sra. Quiñonez y la Sra. Valencia tienen trayectorias reconocidas como defensoras de derechos humanos. La Sra. Quiñonez actualmente cuenta con medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) debido a amenazas de muerte contra ella y contra todo el liderazgo del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera. La Sra. Valencia, la madre de la Sra. Quiñonez también es una líder reconocida y participa en el grupo de mujeres y en los comités locales del Consejo Comunitario.



Ambas continuaron defendiendo los derechos del Consejo Comunitario incluso después de los asesinatos de Genaro García en 2016 y Jair Cortés en 2017 quienes también fueron líderes del Consejo Comunitario de Alto Mira. Después de los asesinatos, la Sra. Quiñonez y la Sra. Valencia fueron desplazadas forzosamente con sus familias a otra parte del país donde la Sra. Quiñonez recibió medidas de protección suministradas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) de Colombia. Con su detención parece que el gobierno esta criminalizando los esfuerzos de las dos líderes de defender los derechos colectivos y territoriales del pueblo afrocolombiano que son reconocidos constitucionalmente.

Confiamos en que la justicia colombiana libere a la Sra. Quiñonez y a la Sra. Valencia de cualquier tipo de acusación y les permita regresar con sus familias a su comunidad. Al mismo tiempo solicitamos a las autoridades colombianas aclaraciones sobre las acusaciones que llevaron a la retención de dos defensoras de derechos humanos.

Solicitamos a la Fiscalía una actuación diligente y transparente en la situación jurídica de la Sra. Quiñonez y de la Sra. Valencia y que se garanticen su derechos de defensa y procesales.

Atentamente,

TAULA CATALANA PER LA PAU I ELS DRETS HUMANS A COLÒMBIA